

# Gobierno de Piñera. La instalación. (De la elección presidencial al Bicentenario)

Augusto Varas<sup>1</sup>

---

## INTRODUCCIÓN

La elección de Sebastián Piñera, más allá de la crisis en que inicialmente sumió a la Concertación, podría tener consecuencias políticas más amplias. De acuerdo a las primeras señales entregadas por el ejecutivo en estos primeros seis meses de gobierno, en vez de una refundación del país o de la derecha, estaría intentando crear las precondiciones para una amplia reestructuración del sistema de relaciones políticas en torno a su propio liderazgo. Su insistencia en que la transición ha terminado sería parte del esfuerzo para crear el espacio adecuado a tal redefinición<sup>2</sup>.

Esta postura estaría apoyada en dos hechos principales. Primero, por que al contar con escasos cuatro años de gobierno y sin mayoría parlamentaria -lo que le impedirá introducir profundas y significativos cambios sistémicos-, el Presidente ha enfatizado los llamados a la unidad nacional y a una democracia de los acuerdos. Segundo, por que en este marco de restricciones se ha visto obligado a continuar con las políticas concertacionistas. Su propuesta de campaña, reforzada en el mensaje, enfatizó "una nueva transición para construir un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades de igualdad, cualquiera que sea la cuna", horizonte estratégico en nada incompatible con el camino pavimentado durante veinte años de gobiernos concertacionistas. A estas está intentando agregarles valor a través de una nueva y mejor forma de gobernar -reiterada 66 veces en su primer mensaje

<sup>1</sup> Presidente Directoro Fundación Equitas

<sup>2</sup> "Pero esa transición ya terminó y es la transición del pasado, y hoy día 11 de septiembre del 2010 con la Portada de Antofagasta a nuestras espaldas yo quiero invitar a todos los chilenos sin ninguna distinción que seamos protagonistas de la transición joven la transición nueva, del futuro" <http://www.valdiviacapital.cl/nacional/30-general/1243-presidente-pinera-hoy-11-de-septiembre-de-2010-gracias-a-dios-tenemos-un-chile-muy-distinto.html> Afirmación que ha encontrado eco en analistas concertacionistas. Cfr. Eugenio Tironi, "La partida de Bachelet pone la lápida a la vieja Concertación", *El Mercurio*, 18 de septiembre, 2010, página C4.

presidencial- empapada de un obvio sesgo empresarial tendiente a abrir nuevos y más amplios focos de renta y lucro privado.

Para desplegar su liderazgo ha encontrado un punto de equilibrio por sobre los partidos de la Alianza y distante relativamente de los gremios empresariales, creando una estructura de mando y gestión altamente personalizada, lo que le ha permitido una proyección mediática autónoma en la que ha sobresalido el permanente despliegue de un presidente en campaña con la preocupación centrada en su aprobación pública, quedando la agenda de la nueva administración subordinada, primeramente a la emergencia producida por el terremoto y, posteriormente, a los vaivenes de imprevistos acontecimientos nacionales (indulto, mineros, mapuches).

Consistente con esta apuesta de fondo han comenzaron a surgir propuestas de reformas constitucionales que permitirían la reelección inmediata y/o la extensión a seis años del período presidencial<sup>3</sup>. La modificación parcial del sistema electoral últimamente enunciada por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet (UDI)<sup>4</sup>, ampliando el número de parlamentarios y creando representaciones nacionales bien podría ser un fuerte incentivo en algunos partidos

3 El senador Pablo Longueira (UDI) ofreció dos alternativas, ampliar el mandato a seis años sin reelección o establecer cuatro con reelección; el diputado RN Gaspar Rivas presentó un proyecto de ley para establecer la reelección presidencial inmediata. [http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia\\_id=21988&categoria\\_id=54](http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=21988&categoria_id=54) El senador Alberto Espina (RN) afirmó que "los períodos presidenciales de cuatro años son muy cortos. Creo que los gobiernos deberían ser de cuatro años con reelección inmediata, garantizando sanciones drásticas para la intervención electoral del Estado [...] en subsidio [...] el período pueda extenderse a seis años". <http://diario.latercera.com/2010/09/12/01/contenido/pais/31-38370-9-los-periodos-presidenciales-de-cuatro-anos-son-muy-cortos.shtml>. Similar postura adoptó el diputado UDI, Nicolás Monckeberg. Definitivamente en contra se pronunció la ex senadora institucional, Olga Feliú: "Reelección presidencial". *La Tercera*, 17 de septiembre, 2010.

4 Presentación del Ministro Larroulet en el Taller de Reforma Política (CED, CDC, Chile21, Cieplan, Dialoga, Igualdad, Proyectamerica), 9 de septiembre, 2010.

-aliancistas y concertacionistas- para repensar su actual política de coaliciones. Un rebaraje del naípe político podría ser el escenario que el ejecutivo, enmarcado en las actuales limitaciones pero apoyado en un reforzado presidencialismo con un alto porcentaje de apoyo popular, estaría buscando en el mediano plazo. Los quiebres observados en la unidad concertacionista en el senado y cámara de diputados durante la discusión de los cambios a la ley anti terrorista podrían estar perfilando por donde se podrían producir estos

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de tensiones. Por una parte, el sacrificio de una mayor coherencia de su política global a cambio de altos porcentajes de aprobación le han acarreado al Presidente permanentes críticas dentro de su propia coalición por estar perdiendo su objetivo inicial<sup>5</sup>, llegando incluso sus críticos de derecha a caracterizar su administración como el quinto gobierno de la Concertación. Igualmente, la personalizada estructura de poder se ha visto acompañada de permanentes conflictos de intereses tanto a nivel presidencial como entre sus principales colaboradores. Por la otra, los llamados a la unidad nacional y democracia de los acuerdos se han visto contrastados con la política realmente existente en la que han primado los despidos de funcionarios públicos junto a una severa, permanente y extensiva crítica al gobierno de Bachelet.

En este primer seguimiento de la política del nuevo gobierno analizaremos la nueva forma que ha adoptado el liderazgo presidencial, que hemos denominado de "presidencialismo plebiscitario", estilo instrumental a su proyección personal; las características de sus principales colaboradores y los conflictos de intereses que los han rodeado alcanzando hasta los planes de reconstrucción post terremoto; el contraste entre los llamados a la unidad en su primer Mensaje y la política implementada que ha tendido a favorecer al "desalojo" y la descalificación de la administración Bachelet; para concluir con algunos temas de relevancia futura.

---

#### UNA NUEVA FORMA DE LIDERAR.

El difícil proceso de asentamiento de la nueva administración, con todas sus diferencias, tensiones internas, orientaciones poco claras, no decididas y contradictorias, pusieron en cuestión el rol del presidente y su efectiva capacidad de conducción de una nueva transición, ahora, al desarrollo. Las dificultades de gobernar un estado tan diferente al mundo de la empresa privada inicialmente entrabaron la gestión piñerista en diversos ámbitos (nombramientos, iniciativas legislativas) perjudicando su nivel de aprobación y el de su gobierno. De acuerdo a la encuesta de Adimark realizada entre abril y mayo, la desaprobación a Piñera

<sup>5</sup> Tema presente en las declaraciones del presidente de RN, Carlos Larraín, cuando afirmó que "la autoridad que pasa pendiente de las encuestas simplemente no puede gobernar" (*La Segunda*, 28 de julio, 2010), hasta en columnas como la de Andrés Benítez, "El Llanero Solitario", *La Tercera*, 11 de septiembre, 2010.

aumentó trece puntos porcentuales<sup>6</sup>, y en julio la encuesta CEP daba un magro 45% de aprobación presidencial.

Las personalizadas relaciones del presidente con su gabinete y los partidos de la Coalición para el Cambio dieron pie a esfuerzos de caracterización de su original posicionamiento. Entre los más recurridos se puede rescatar la de "bonapartismo", "en el sentido de que termina por anular el rol de los partidos políticos para centrarse en un poder imperial, surgido del sufragio popular"<sup>7</sup>. Sin embargo, esta caracterización más bien correspondería a un representante de una clase social atomizada incapaz de representarse políticamente a sí misma y necesitada de protección y no corresponde con la situación actual.

La personalización del poder y ubicación del Presidente Piñera por sobre sus fuerzas de apoyo ha tenido un sentido distinto. Su falta de legitimidad de origen y de enraizamiento político en la derecha, así como su débil integración a las redes construidas en años de construcción partidaria, lo obligan a un posicionamiento independiente por sobre estas constelaciones socio-políticas. Intensificado por las características del presidencialismo chileno y subrayando su particular y directa relación con sus electores, su estrategia bien podría calificarse como una forma de presidencialismo con fuertes componentes plebiscitarios<sup>8</sup>.

Esta fórmula no ha sido fácil de aceptar por sus partidarios. A muy pocos días de inaugurado el nuevo gobierno, Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos (CEP), metafóricamente descalificaba el tipo de liderazgo desplegado criticando la mala relación del Presidente con los partidos que le hicieron la campaña, el conflicto de intereses y la indecisión de Piñera frente a la disyuntiva de política o negocios, la que estarían minando "el prestigio moral y credibilidad del Presidente", y cuestionaba su discurso vacío, su tendencia a la micro administración<sup>9</sup>.

Las observaciones que mereció el primer mandatario por su estilo "plebiscitario" de gobernar pasaron así desde la inicial admiración por su extenuante dedicación al trabajo (24/7) a una insatisfacción con las formas y actitudes asumidas como jefe de estado<sup>10</sup>. Un principio de respuesta la proporcionó días después una editorial de *El Mercurio*, el que reconocía que, "la identidad más específica del nuevo

6 Adimark, "Encuesta: Evaluación Gestión del Gobierno. Informe mensual Abril 2010". [http://www.adimark.cl/medios/Ev\\_Gob\\_Abr10.pdf](http://www.adimark.cl/medios/Ev_Gob_Abr10.pdf)

7 Marco Enríquez-Ominami, "Bonapartismo y descomposición", *La Tercera*, 28/06/2010.

8 Sobre las características del presidencialismo: Juan Linz, "The perils of presidentialism", *Journal of Democracy*, Winter 1990.

9 Arturo Fontaine, "Piñera en blanco y negro según Fontaine", *La Tercera Reportajes*, 28 de marzo, 2010, páginas 6-7.

10 El ex Director de Estudios Jurídicos de Libertad y Desarrollo se preguntaba "¿Por qué todos los que de una u otra manera se vinculan con el "antiguo régimen" se permiten un comportamiento descortés o insolente hacia la máxima autoridad del país?". Axel Buchheister, "Respeto por la dignidad presidencial", *La Tercera*, 27 de junio, 2010. *Tema que llegó hasta el gabinete*: " 'Presidente, creo que llegó la hora de colgar las parkas rojas', recomendó Bulnes' [...] '¡Pero cómo dices eso!', fue la respuesta casi inmediata de Piñera". *La Tercera, Reportajes*, 11 de julio, 2010, página 4.

Mandatario aún no se asienta”<sup>11</sup>. A lo que el asesor de comunicaciones replicaba que “el Presidente Piñera no se está construyendo un personaje y con el tiempo eso se va a valorar. Pone toda su autoridad y liderazgo en la ejecución del proyecto que encabeza. Le gusta estar en terreno y tiene sentido del humor. Los chilenos castigarían si se empezara a construir un personaje, y eso no se está haciendo”<sup>12</sup>. No obstante, el senador Allamand replicaba que el mandatario “debe encuadrarse un poco mejor en el rol presidencial”<sup>13</sup>. Respaldo implícitamente esta postura, *El Mercurio* ofreció seis mandamientos para cuidar la imagen presidencial: no ser eterno candidato, no improvisar, solo una idea por día, anticipar escenarios conflictivos y no enfrentar personajes populares<sup>14</sup>. Aun cuando la polémica parecía ser un simple problema de libreto y escenografía, ella escondió un tema más profundo, el de la no compartida definición del rol presidencial tan autónomo de fuerzas de apoyo y su agenda de hecho aparentemente distinta a la de la coalición que lo llevó al poder.

Este “presidencialismo plebiscitario” se vio favorecido, primeramente, por la situación observada al interior de la Alianza. La competencia desplegada al interior de RN y la UDI por la elección de sus direcciones partidarias, las distintas prioridades políticas y agenda subyacente que las contenía crearon un período en el cual el ejecutivo encontró un amplio espacio de maniobra<sup>15</sup>. En segundo término, concomitantemente surgieron tensiones al interior de cada ministerio por las contradicciones entre ministros personalmente ligados al presidente y los cuadros UDI, muchos de los cuales asignados a los segundos niveles de mando, lo que incrementó la entropía intra Alianza despotenciándola en su capacidad de influencia sobre el ejecutivo. Las profundas e históricas fracturas transversales entre liberales y conservadores al interior de la Alianza también se expresaron en las tensiones entre ministros fundamentalmente cercanos al presidente y funcionarios de segundo nivel que, con características diferentes en cada caso, dieron por

11 “El respeto a la autoridad presidencial ha sido siempre motivo de preocupación de estas páginas, y hoy llaman la atención algunos signos que, sin llegar a constituir una tendencia, no contribuyen a fortalecerlo. Algo de eso hay en la forma más que en el fondo del emplazamiento que hizo el rector de la Universidad de Chile al Mandatario; en las expresiones de los dirigentes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tras su reunión con aquél, o en la molestia pública del presidente del fútbol profesional por la espontaneidad de la invitación de Piñera a la selección nacional para homenajearla en La Moneda. A escasos 100 días de haber asumido, la identidad más específica del nuevo Mandatario aún no se asienta, y de seguro no será ella la cercanía empática de Bachelet, ni el perfil de estadista republicano que cultivó Lagos, sino probablemente algo más cercano a una nueva forma de gobernar y gestionar los asuntos públicos, a esa cultura de “hacer bien las cosas”-palabras que tuvieron eco en los electores y lo llevaron a La Moneda”. *El Mercurio*, “La semana política”, página A3, 4 de julio de 2010.

12 Hernán Larraín Matte, asesor comunicacional de la Presidencia, *El Mercurio*, 6 de julio, 2010.

13 “En una frase: que se olvide de la parka roja”. *Cambio21*, 06-07-2010. La molestia por el particular posicionamiento presidencial se manifestó en el permanente cuestionamiento del senador Allamand a la dirección política del gobierno, especialmente al presentar el proyecto de ley “Acuerdo de Vida en Común” que reconoce jurídicamente las parejas homosexuales, tema contemplado en el programa presidencial pero que el ejecutivo había abandonado.

14 *El Mercurio*, 11 de julio, 2010, página D4.

15 El triunfo de Carlos Larraín en RN (68%) mostró la abrumadora presencia al interior de RN de los sectores más conservadores. Aun cuando revisó otras características, la candidatura de José Antonio Kast a la dirección de su partido mostró la disconformidad con el cerrado manejo de la dirección de Coloma y la vieja guardia UDI, y una propuesta de perfilar de mejor forma las posturas más conservadoras del partido a nivel nacional y en el gobierno. Sin embargo, el Consejo General del gremialismo, le dio el 68,7% de respaldo Coloma, y un magro 31,3% de apoyo para la renovación que proponía Kast, un apoyo menor al logrado en la elección anterior.

término la corta gestión de los subsecretarios de Trabajo (RN) y Cultura (Fundación Jaime Guzmán

Frente a las fisuras políticas e ideológicas y los procesos de cambio al interior de la Alianza y el gobierno, el Presidente desplegó un incesante activismo mediático en pos de mayores niveles de aceptación ciudadana lo que le dio a su gestión, en esos momentos, un carácter aparentemente difuso en el que su rol como conductor de un programa de gobierno que se había abierto a todas las expresiones de la derecha no se lograba perfilar con claridad. El corto tiempo transcurrido desde la asunción al mando, el costo político de la reconstrucción junto con los esfuerzos por recuperar la economía no facilitaron su tarea, pero quedaba en claro que dentro de sus propias fuerzas de apoyo su postura supra partidaria era un tema que concentraba crecientemente las preocupaciones<sup>16</sup>.

El presidencialismo plebiscitario de Piñera se vio confrontado a una severa prueba con ocasión de las propuestas de indulto bicentenario por parte de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas, saliendo airoosamente de ella gracias a su decidida postura en sintonía con la mayoría de país<sup>17</sup>, objetivo convertido en principal opción y duramente criticado desde sus propias filas. Fue el presidente de RN, Carlos Larraín, el más claro al afirmar que "la autoridad que pasa pendiente de las encuestas simplemente no puede gobernar"<sup>18</sup>. El magro 45% de aprobación que obtuvo el Presidente en la encuesta CEP de julio de 2010; y la caída en la probación presidencial (52% a 46%) y un aumento en la desaprobación al Presidente (34% a 40%) informado por Adimark a comienzos de agosto, en ese momento parecía haberle dado la razón a Larraín.

Sin embargo, el cambio más radical de apoyo ciudadano que fortalecería la apuesta presidencial fue producto del adecuado, sostenido y exitoso compromiso del ejecutivo con la dramática situación vivida por 33 mineros en la mina San José en Copiapó. Esta crisis que puso en cuestión al sector privado por su falta de atención a las medidas de seguridad y protección de los operarios catapultó al estrellado al ministro de minería y significó un súbito aumento de la popularidad presidencial (56,2%). Su compromiso y esfuerzos por un pronto y seguro rescate, con la investigación de los hechos y penalización de los responsables, así como la revisión de las normas de seguridad general del trabajo en el país -comisión encargada a la ministra del trabajo y que dejó fuera a representantes de la CUT- generaron un especial momento de liderazgo presidencial en el inicio del mes del bicentenario.

En esta búsqueda de aprobación Piñera se enfrentó a diversas movilizaciones sociales (estudiantes, mapuches, habitantes de Isla de Pascua, alcaldes de la

16 Una columna de Axel Buchheister fue expresiva de tales diferencias donde enrostraba al gobierno que su agenda hubiera sido raptada por el terremoto postergándose las prioridades que lo habían llevado al poder. "Una 'guerra falsa' ", *La Tercera*, 18 de abril, 2010, página 4.

17 "Una encuesta realizada por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, los días 22 y 23 de julio, en la que el 65% de las personas entrevistadas señaló que no debería haber indulto, frente al 27% que se manifestó a favor". <http://www.udd.cl/noticias/un-65-de-la-poblacion-se-opone-a-otorgar-indultos>

18 *La Segunda*, 28 de julio, 2010.

región del Bío-Bío). Por una parte, esta fueron sistemáticamente desperfiladas por los medios de información pro gobierno<sup>19</sup>. Por la otra, el ejecutivo desplegó un desproporcionado control policial. No obstante, el poder de las protestas se hizo sentir. Así, la masividad y transversalidad política y social de oposición al proyecto Barracones para instalar dos centrales termoeléctricas en el sector de Punta de Choros, en la región de Coquimbo<sup>20</sup>, forzaron al Presidente a anunciar la relocalización de la planta. Decisión que generó nuevos problemas al ejecutivo ya que el proceso de aprobación había pasado todos los pasos legales e institucionales incluyendo la aprobación del concejo comunal y la COREMA, por lo cual empresarios y dirigentes políticos de la Alianza se volvieron a manifestar disconformes con el tipo de intervención presidencial al alterar la institucionalidad vigente. De la misma forma, la huelga de hambre de los comuneros mapuche y el apoyo de cientos de manifestantes en las calles de Santiago obligaron al ejecutivo a enviar proyectos de ley restringiendo la competencia de la justicia militar y redefiniendo los tipos penales de la ley anti terrorista, así como encargar al arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, buenos oficios para la apertura de un diálogo entre el gobierno y los comuneros mapuche en huelga de hambre.

El presidencialismo plebiscitario inaugurado por Piñera mostró sus bondades cuando en la última semana de agosto la encuesta *El Mercurio-Opina* le dio un 56,2% de apoyo. Sin embargo, las críticas a la personalización del poder se mantuvieron. En esa misma edición la editorial semanal del matutino reiteraba que “la búsqueda de aprobación no ha de ser el objetivo de esa gestión, ni la legitimidad de las causas justifica el descuido de las formas propias de la institucionalidad que se ha dado el país”<sup>21</sup>.

Con todo, en estos seis primeros meses de gobierno la política del ejecutivo de lograr un importante apoyo en la opinión pública como recurso de poder ha sido exitoso, lo que acoplado a las últimas señales de apertura a reformas constitucionales del sistema electoral, podría estar abriendo espacio para la aun no visible estrategia presidencial de reordenamiento de las dos principales coaliciones.

---

## LA APERTURA

El estreno de Piñera en su rol presidencial y las características de su gestión se manifestaron la misma noche del triunfo tanto en su discurso como, posteriormente, en la configuración de su primer gabinete. Recién conocidos los resultados el presidente electo formuló los dos parámetros estratégicos de su gestión: un gobierno de unidad nacional incorporando personalidades independientes o que

19 Tal fue así que, producto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche las dependencias de Radio Bio-Bio fueron tomadas pacíficamente para poner término al cerco comunicacional. Por su parte, el Colegio de Periodistas condenó el silencio informativo en torno a esta huelga de hambre que 32 presos de comunidades mapuche llevaban a cabo desde hace más de un mes en diversas cárceles de la Octava, Novena y Décima Regiones.

20 DLB Consultores. “Informe de prensa”. 25 de agosto de 2010

21 *El Mercurio*, 5 de septiembre, 2010, página A3.

no votaron por él; y una democracia de los acuerdos<sup>22</sup> para conducir una segunda transición que llevara al desarrollo.

En el plano programático la propuesta de campaña de Piñera enfatizó siete puntos centrales, con énfasis en una economía de mercado entre los que se estaba el "reducir la desigualdad en el acceso a los activos productivos, tales como educación, infraestructura y derechos de propiedad; mejorar el funcionamiento de los mercados, ya sea el de productos, el laboral o el de los créditos; fortalecer la capacidad redistributiva del Estado descentralizando los programas sociales; y el mejorar el sistema político mediante mayor transparencia o eliminando ventajas injustificadas".

Recién nominado el primer gabinete el presidente electo bajó al máximo las posibles confrontaciones con la oposición de manera de aplacar las tensiones que generaría su agenda de cambios. Así, el ministro designado en minería afirmó que *Codelco* seguiría siendo estatal, el de salud que la píldora del día después estaría disponible en los consultorios, y el de agricultura que *Indap* seguiría y sería reforzado. Igualmente, en materia de empleados fiscales, en los días posteriores a la designación del gabinete y en el discurso del presidente electo, se trataron de borrar los temores de persecución política.

Sin embargo, en la primera semana inmediatamente después de su triunfo comenzaron a delinearse los grandes temas de confrontación socio-política tanto con la oposición, como con las organizaciones sindicales. Los primeros en salir a la cancha fueron los empresarios quienes, después de la elección de sus principales dirigentes gremiales, rápidamente exigieron mayor flexibilidad laboral; la disminución del salario mínimo; el término del actual sistema de indemnización por años de servicio<sup>23</sup>; rebajas tributarias; reformas al sistema regulatorio (litio<sup>24</sup> y acuícola; trámites de aduana, transacciones financieras; otorgamiento de permisos) poniendo fin de las "exigencias desmedidas que suelen acompañar los procesos de proyectos en materias medioambientales"<sup>25</sup>. Las demandas de flexibilización laboral preocuparon de inmediato a la dirigencia sindical lo que llevó al presidente de la CUT a pronunciarse en contra de una mayor flexibilidad laboral y del término

22 Formulación explicitada en su columna: "Democracia de los acuerdos: ¿En qué consiste? ¿Por qué ahora? ¿Es posible?", *El Mercurio*, 31 de enero, 2010. Una crítica a esta propuesta en: Carlos Peña, "¿Democracia de los acuerdos?", *El Mercurio*, 31 de enero, 2010.

23 Rafael Guillisasti: "En materia laboral también hemos planteado que el seguro de cesantía es un mecanismo muy eficiente que ojalá se pueda reforzar, para cubrir los ajustes que se producen en las empresas, y avancemos hacia un contrato único con un seguro de cesantía más fuerte y disminución de las indemnizaciones por años de servicio". Carlos Jorquera, Consejero de la Cámara de Comercio de Santiago, "que se avance en la disminución del salario mínimo y el término de indemnización por años de servicio". *La Nación*, 19 de enero de 2010.

24 Preocupación por la propuesta del Senador Ricardo Núñez de declarar al litio como material estratégico incorporado en la Constitución. *El Mercurio*, 26 de enero, 2010, página B3.

25 "¿Cuales deben ser los principales obstáculos que deben removerse?", *El Mercurio*, 13 de febrero, 2010, página A3.



de la indemnización por años de servicio<sup>26</sup>, temas que reiteró en su discurso con ocasión del 1 de mayo.

Las características del primer gabinete y de otras autoridades gubernamentales mostraron la impronta del nuevo gobierno en su primera etapa de instalación. Aun cuando Rafael Guilisasti, presidente de la CPC, afirmaba que "el propio Sebastián Piñera ha señalado que éste no será el gobierno de los empresarios"<sup>27</sup>, después de las nominaciones quedó en claro, según Carlos Peña, que este sería un "gabinete del retail [parecido] cada vez más a los restaurantes de provincia: un país atendido por sus propios dueños"<sup>28</sup>. Inicialmente, se tendió a asimilarlo al de Jorge Alessandri en 1958, no obstante, un análisis más de cerca de su configuración muestra que más importante que la presencia de gerentes, doctorados universitarios, o ingenieros provenientes fundamentalmente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un par de importantes colegios privados, el equipo presidencial se constituyó básicamente con representantes de los diez más importantes conglomerados económicos del país (Anexo I), dándole a estos últimos un amplio acceso e influencia directa en la formulación de políticas públicas, oportunidad nunca antes ofrecida.

Socio-culturalmente, el equipo ministerial replicó el perfil profesional, económico y la experiencia del propio presidente -a la vez que las redes sociales que los contienen y unen-, constituyendo de hecho en una nueva cofradía destinada a ejercitarse en el poder político. Esta distancia relativa de las estructuras partidarias y su dependencia de la figura del presidente si bien le dio un cierto pegamento funcionario, dejó al gabinete sin el necesario respaldo político, tema que surgirá repetida y conflictivamente en la relación gobierno-Alianza.

El equipo ministerial se completó con la nominación de subsecretarios y asesores, predominando en los cargos clave ministros más vinculados al círculo íntimo del presidente, lo que motivó quejas de la UDI. Sin embargo, a nivel de asesores, los centros de pensamiento de la derecha desembarcaron en masa en el gobierno, siendo *Libertad y Desarrollo* y la *Fundación Jaime Guzmán* quienes, con fuerte sesgo UDI, lograron introducir un mayor número de expertos en cargos gubernamentales claves en relación a los provenientes del *Instituto Libertad* de RN.

Así, la configuración del equipo de gobierno tendió a responder más que nada a una estructura de mando personalizada del Presidente y su círculo más íntimo, dejando relativamente fuera de la toma de decisiones a las estructuras partidarias y empresariales corporativas que le dieron el apoyo electoral.

26 Arturo Martínez, *La Nación*, 19 de enero de 2010

27 *Ibid.*

28 Carlos Peña, "El gabinete de Piñera", *El Mercurio*, 7 de Febrero de 2010; "El gabinete del retail", *El Mercurio*, 14 de Febrero de 2010.

## CONFLICTO DE INTERESES

La instalación de las nuevas autoridades provenientes del mundo privado y cercanas al presidente abrió nuevos flancos de crítica producto del nombramiento de funcionarios con obvios conflictos de interés. Los casos más destacados fueron los del intendente de Santiago, Fernando Echeverría, dueño de constructora de edificios dañados por el terremoto; el de Mauricio Gatica, Director de Concesiones del MOP, socio de la empresa Ruta 68 y presidente de COPSA, obras bajo fiscalización de su propia dirección; Patricio Lahsen Director General de Obras Públicas, originalmente gerente general de la Concesionaria Convento Viejo, la que había demandando al estado por USD\$28 millones<sup>29</sup>; Loreto Silva, subsecretaria de Obras Públicas, que había sido abogada de la Cámara Chilena de la Construcción, participado en la redacción de la Ley de Concesiones, y demandado al Estado<sup>30</sup>; y Felipe Irarrázaval, designado Fiscal Nacional Económico, quién había patrocinado a la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, entidad acusada por la FNE de coludirse para hacer fracasar una licitación del Metro<sup>31</sup>. La inclinación a mezclar política y negocios una vez más se evidenció en el caso de los intendentes nombrados en la zona del sismo como, por ejemplo, en la IX Región (Andrés Molina, gerente general de Forestales Santa Laura y Magasa), VII Región (Rodrigo Galilea, gerente general de empresa de ingeniería y construcción en el Maule, y presidente del directorio de Aguas San Pedro), Región Metropolitana y VI Región (Rodrigo Pérez, miembro del directorio de Esvál y Essbio).

Otro flanco conflictivo que se abrió en el mes de julio fue el del Intendente Metropolitano, Fernando Echeverría, promotor de la modificación al Plano Regulador de Santiago, lo que podría beneficiarlo a futuro. De acuerdo al diputado Gabriel Silber (DC) el intendente - principal promotor del proyecto y un actor importante del punto de vista inmobiliario - estaría en un franco conflicto de interés<sup>32</sup>. A este conflicto se sumó el nombramiento del nuevo Superintendente de Salud, Luis Romero, anterior subgerente general de la Isapre Colmena", considerado como un funcionario ortodoxo y reacio a las regulaciones del sistema de Isapres<sup>33</sup>. Para

29 <http://ciperchile.cl/2010/03/18/los-vinculos-de-pinera-con-las-empresas-de-los-edificios-danados-los-hombres-del-presidente> Lahsen renunció al cargo a dos meses de haberlo asumido. *La Segunda*, 13 de mayo, 2010, página 39.

30 [http://www.cooperativa.cl/autoridades-que-acompanan-a-pinera-enfrentan-diversos-conflictos-de-intereses/prontus\\_notas/2010-03-25/172046.html](http://www.cooperativa.cl/autoridades-que-acompanan-a-pinera-enfrentan-diversos-conflictos-de-intereses/prontus_notas/2010-03-25/172046.html)

31 Algunas "desprolijidades" adicionales se produjeron con el nombramiento del Cónsul general en La Paz quién había dicho que la mejor política hacia Bolivia era no tener relaciones, lo que provocó la abstención de hecho de Bolivia en la elección de Insulza en la OEA y la toma de distancia con el nuevo representante consular; la nominación del gobernador de Los Andes, Ángel Barbieri, con 137 documentos morosos o protesto en DICOM destituido por deudas que no pudo pagar; o como la del flamante gobernador del Bío-Bío, José Miguel Stegmeier, quién fue destituido a las horas de ser nombrado al sindicarlo como vinculado con una red de lavado de dinero de la ex Colonia Dignidad; el caso del Director de Gendarmería, ex general de Carabineros Iván Andrusco, quién fue integrante de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo represor de la dictadura quién fue rápidamente removido de su cargo después de transparentarse su curriculum; el nombramiento del nuevo director del diario *La Nación*, Mirko Macari, director del diario electrónico *El Mostrador*, por su supuesto rol en las acusaciones contra personeros de la UDI en el caso Spiniak; y la duración por 48 horas en sus cargos del derrotado candidato a senador de la UDI, el abogado Cristián Letelier y el economista de derecha Ángel Cabrera, en sus cargos de directores de la ZOFRI. Miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara exigieron al gobierno destituir al embajador en Panamá, Alberto Labbé, por haber declarado en calidad de inculpado en la Operación Cóndor. Y, a fines de junio, el senador Eduardo Frei cuestionó el nombramiento de Luis Castillo como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, debido a sus vínculos con la investigación que se sigue sobre la muerte de su padre.

32 *Cambio 21*. 2 de julio, 2010

33 *Ciper*, 25 de junio de 2010.

completar el cuadro, a mediados de julio el director recientemente designado de la Conadi, Francisco Painepán, reconoció que cometió irregularidades y devolvería recursos mal asignados, para luego despedir “al subdirector nacional de la entidad, Alejandro Huaiquil, quien era el personero que habría liderado la investigación interna contra la máxima autoridad de la entidad indígena, debido al subsidio de \$3 millones de pesos que se adjudicó de manera irregular y que la Contraloría le obligó devolver al Estado, ya que percibía una renta anual calculada en \$80 millones de pesos, en su negocio de ferreterías”<sup>34</sup>. Similar política se observó en la licitación de la publicidad del gobierno. De acuerdo al diputado Felipe Harboe (PPD) esta “se concentra en cinco empresas los servicios de publicidad del gobierno lo que da paso a un oligopolio y afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, va a aumentar la subcontratación y así estas grandes empresas van a tener ganancias por dos lados”<sup>35</sup>.

El conflicto de intereses continuó durante agosto cuando la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue cuestionada por la senadora Soledad Alvear (DC) recurriendo a la Contraloría General de la República ya que la ministra “antes de asumir su cargo y a través de la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), habría participado en la evaluación medio ambiental del proyecto para construir la termoelectrica Cruz Grande, que se emplazaría en una zona cercana a la caleta Punta de Choros de la Región de Coquimbo y que estará próxima al inicio de su proceso de aprobación”<sup>36</sup>.

No obstante las críticas que levantaron estos nombramientos, el gobierno anunciaría la adjudicación a tres grandes empresas (Easy, Homecenter y Construmart) el programa “Manos a la obra”, encargado de la reconstrucción post terremoto. Aun cuando este tipo de compras directas y adjudicaciones sin licitación era permitido por la legislación sobre sismos y catástrofes, las críticas tanto desde la oposición como del sector empresarial mediano y pequeño inmediatamente se hicieron sentir obligando al gobierno a informar que habría “una segunda fase” en la que incorporarían las pymes y las ferreterías de la Región del Bío-Bío implementando “un sistema de adquisición a través de las intendencias, para que las ferreterías también sean parte de este programa”<sup>37</sup>.

Aun cuando el Presidente envió al Congreso el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego con el que se buscaba transparentar el patrimonio e intereses de quienes tuvieran cargos en la administración pública, y extendía la obligación a los senadores y diputados y el Contralor General de la República, el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), afirmó que la disposición de la Concertación para legislar el fideicomiso ciego estaría sujeta a la condición de no trabajar en iniciativas donde existiera un “conflicto de interés” por parte del oficialismo, afirmando que

34 *Cambio 21*, 20 de julio, 2010.

35 *Cambio 21*, 17 de agosto, 2010.

36 *El Mostrador*, 30 de agosto, 2010.

37 “Gobierno incorpora a pymes para reconstrucción”, *La Nación*, 2 de abril, 2010.

la Concertación evaluaría en su momento una posible inhabilidad para legislar al respecto.

Al centro de esta tensión estuvo el plazo de la concesión del canal a la Universidad de Chile, el que vence en 2018, lo que hizo fracasar las negociaciones con el grupo Linzor para vender ChileVisión. Dado que el Presidente debía nombrar autoridades en TVN y el Consejo Nacional de TV y legislar en materia de televisión digital, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de pedir a Piñera que vendiera sus acciones de ChileVisión. Sin embargo, el fallo de la Contraloría del 12 de julio estableció que el Presidente podía hacer los nombramientos en TVN y Consejo Nacional de TV, razón por la cual a fines de julio el directorio de TVN nombró a Mauro Valdés como director de la estación. Finalmente, la empresa estadounidense Inversiones Turner International II Ltda. concretó la compra del 100 por ciento de ChileVisión por más de US\$140 millones, de manera que el dueño de CNN, HBO y TNT, administrará el canal. En 2005, Piñera pagó US\$24 millones por la señal televisiva<sup>38</sup>.

Con todo, el mismo fallo consideró que el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, debía abstenerse de tomar decisiones vinculadas al fútbol, debido a su condición de accionista de Colo-Colo, postura transversalmente defendida. Lo insostenible de su posición y la presión sobre este funcionario lo obligaron a fines de julio a vender sus acciones de Colo-Colo, lo que dejó al Presidente Piñera, propietario de un 13,77 % de ese club, nuevamente en una difícil posición frente al tema de sus conflictos de intereses. Sin embargo, la venta de ChileVisión -y su posterior declaración declarando que por la venta prematura de acciones de LAN había perdido US\$ 700 millones- terminó por bajarle el perfil al tema de los conflictos de interés del Presidente.

---

#### EFFECTOS POLÍTICOS DEL TERREMOTO

El sismo 8.8 en la escala de Richter que conmovió al país entero generó por parte de las nuevas autoridades una serie de recriminaciones al gobierno saliente, sin embargo, cerca de la transmisión del mando se inauguró una etapa de colaboración en la que este incorporó a funcionarios de la entrante administración en los comités de crisis y el gobierno electo manifestó su voluntad de mantener a algunos funcionarios públicos en funciones para darle continuidad a la gestión. En este marco de colaboración Piñera intentó retomar la política de un “nuevo trato” en torno a tres proyectos de ley: uno de emergencia, otro de reconstrucción y un tercero para posibilitar las donaciones privadas para la reconstrucción.

El tono y las críticas a la gestión del gobierno saliente pasaron a un nivel más constructivo que apuntó a la reforma del estado y la creación de una nueva y más eficiente institucionalidad estatal para enfrentar adecuadamente problemas de alerta temprana, el establecimiento de un centro de control y mando, de un comité

<sup>38</sup> *El Periodista*, 26 de agosto, 2010.

de crisis permanente y una claridad sobre su dirección ejecutiva, lo que significaría resolver los problemas de comunicación y coordinación de todos los recursos estatales incluyendo las fuerzas armadas. Este cambio de política se vio reforzado por el increíble apoyo logrado por la Presidenta Bachelet, la que indiferente de las críticas recibió a los pocos días antes de transferir el poder a Piñera un asísmico y contundente 84% de aprobación ciudadana<sup>39</sup>.

La rápida reacción de la administración entrante de dar por descontado que el programa presidencial y sus promesas debían alterarse en vista de la emergencia lo encauzó a fijar nuevas prioridades e iniciar un estudio para cambiar la ley de presupuestos. Al mismo tiempo, la estimación del monto total de la reconstrucción se convirtió en campo de enfrentamiento de entre quienes vieron en esta situación una nueva oportunidad de privatizaciones o, por el contrario, de aumentar algunos impuestos. Así, aun cuando consultoras privadas estimaron que el costo sería cercano a la mitad o un tercio de la estimación gubernamental<sup>40</sup>, los USD\$30 mil millones se constituyeron en la línea de base de la administración y sirvieron de apoyo para el cambio de prioridades y nuevas fórmulas para solventar el costo de la reconstrucción, por lo que se volvió al tema de la privatización de Codelco<sup>41</sup>, la venta de la participación estatal en las sanitarias, y el limitar el AUGE y la reconstrucción de escuelas<sup>42</sup>.

Los dos temas más urticantes para el empresariado fueron el aumento transitorio de impuestos a las ganancias de las grandes empresas y el royalty minero<sup>43</sup>. El llamado de atención del sector empresarial al Presidente evidenció una falla estructural en la relación entre el equipo de gobierno y los gremios empresariales que no vieron con buenos ojos tanta concentración del poder en el ejecutivo, la marginación de las influencias institucionalizadas y reaccionaron con temor frente al riesgo de un aumento de la carga impositiva que podría ser más que temporal. Por tales razones los máximos representantes de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por Rafael Guilisasti, tuvieron un primer encuentro oficial con Piñera quien ratificó su intención de un aumento temporal de los impuestos a las grandes empresas sin afectar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), ni a las personas, por lo que la opción de aumentar gravámenes a las grandes firmas no estaba descartada. El pragmatismo y la necesidad de obtener recursos para la reconstrucción que no debilitara el dólar y, al mismo tiempo, no implicara niveles mayores de inflación doblegó la actitud más ideológica anti impositiva de sectores del empresariado y de la UDI. Finalmente, la propuesta del Ejecutivo contempló un aumento de tres puntos porcentuales al impuesto a las empresas por tres años, aumento por dos años del royalty a las mineras entre el 3,5% y el 9%, alza de contribuciones a inmuebles con tasación superior a \$100 millones, y aumento del 60% al 67% del impuesto al tabaco. Sin

39 [http://www.adimark.cl/medios/Ev\\_Gob\\_Terremoto2010.pdf](http://www.adimark.cl/medios/Ev_Gob_Terremoto2010.pdf)

40 Agencia EFE, "Chile cifra pérdida en infraestructura pública en 10.000 millones de dólares", [http://www.google.com/hostednews/epa/article/AleqM5gkvEvJa1Vv\\_wBxOjsVZNDZ-EW2kg](http://www.google.com/hostednews/epa/article/AleqM5gkvEvJa1Vv_wBxOjsVZNDZ-EW2kg)

41 Leonidas Montes, "La oportunidad del terremoto de Piñera", *La Tercera*, 14 de marzo, 2010, página 47.

42 "Elevar la mirada", *El Mercurio*, 15 de marzo, 2010, página A3.

43 Una editorial de *El Mercurio*, considerando la demostración de sensibilidad de las empresas mineras ante la catástrofe, proponía un royalty voluntario. *El Mercurio*, Editorial, 9 de marzo, 2010, página A3.

embargo, la "letra chica" de la propuesta nuevamente mostró las características que las políticas públicas de la administración tendrían en su punto de partida. Así, en lo relativo al royalty minero, el ministro de minería confesaba que éste tenía importantes beneficios para las compañías<sup>44</sup>.

Lo mismo se observaba en materia del aumento de impuesto a las grandes empresas, ya que, como el diario oficialista *La Nación* lo señalaba, "si bien el gobierno elevará transitoriamente el tributo a las empresas, impulsará también un beneficio que permite depreciar el primer año el 50% de nuevas inversiones. Expertos tributarios dicen que ello reduciría la base impositiva y, por tanto, las firmas pagarían menos impuestos. Economistas estiman que es un incentivo importante a la inversión"<sup>45</sup>. La fuerte crítica a esta compensación forzó finalmente al ejecutivo a eliminar del proyecto de ley la depreciación acelerada.

La discusión del proyecto de creación del Fondo Nacional para la Reconstrucción (FNR) fue un momento decisivo que mostró los límites del accionar del gobierno y las capacidades de la oposición para contribuir a una política pública pensando en el interés nacional. De esta forma, durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados "la Contraloría hizo observaciones al proyecto convergentes con las de la oposición eliminando del comité ejecutivo que dirigiría el Presidente de la República y la secretaria ejecutiva, la irretroactividad de la normativa, y la reducción del ámbito de potestad administrativa del Jefe de Estado. [Con lo que el FNR quedó] sujeto a fiscalización de la Contraloría y la Cámara de Diputados, que operará como un programa del Ministerio de Hacienda inserto en la ley de presupuesto y que tendrá un conjunto de reglas de administración que disuelven cualquier interrogante acerca de su funcionamiento"<sup>46</sup>. No obstante este acuerdo oposición-gobierno, las otras dos propuestas del royalty y aumento de impuestos a las grandes empresas evidenciaron una profunda y transversal fisura al interior de la Alianza escuchándose acusaciones de "política concertacionista"<sup>47</sup>.

Estas diferencias con el sector empresarial y parte de la Alianza -en pleno proceso de renovación de sus dirigencias partidarias- fueron presentadas por los medios de comunicación como parte de una política de toma de distancia del ejecutivo respecto del mundo político y económico, intentando demostrar su independencia en ambos frentes en el contexto del controvertido tema de la relación política-negocios, el que hasta el mes de agosto seguiría persiguiendo al Presidente por su no resuelta relación con *ChileVisión*.

44 "Ministro de Minería: Con Cambio a Royalty Sistema Tributario Va a Ser Bastante Más Justo", *Estrategia*, 27 de abril, 2010. [http://www.estrategia.cl/detalle\\_noticia.php?cod=29280](http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=29280)

45 "Expertos: depreciación acelerada puede compensar alza de impuestos", *La Tercera*, 20 de abril de 2010, página 22.

46 "Acuerdo político para la Ley de Donaciones", *La Nación*, 23 de abril, 2010.

47 Rolf Lüders, "Una oportunidad desperdiciada", *La Tercera*, 20 de abril, 2010, página 4.

EL MENSAJE

Tal como su discurso la noche del triunfo fue el estreno de Piñera en su rol presidencial, su primer Mensaje fue el estreno en su rol gubernamental. Este se caracterizó por ciertas continuidades con la Concertación y, las más significativas, por anunciar la introducción de importantes cambios en la orientación y gestión del estado. En la medida que el tono del mensaje fue conciliador y generoso hacia los ex presidentes concertacionistas, el carácter marcadamente liberal de los cambios tendió a pasar levemente desapercibido ya que los mecanismos y políticas específicas a ser implementadas no fueron suficientemente explicitados.

En materia de continuidades<sup>48</sup> se podría mencionar el permanente énfasis en la unidad nacional junto al cual el primer mandatario introdujo elementos de orientación valórica como los de solidaridad y equidad. Materializando este compromiso anunció la creación del Servicio para Discapacitados, los cincuenta liceos bicentenario, el perfeccionamiento del seguro de desempleo; la eliminación gradual y progresiva del 7% de la cotización de salud de los jubilados más pobres<sup>49</sup>; y el ingreso ético vía bonos condicionados.

Se comprometió, en el marco del terremoto, a continuar con el dictamen de marzo de la Dirección del Trabajo frente a excesos del mercado restringiendo "los despidos por caso fortuito o fuerza mayor sin derecho a indemnización, de manera de evitar abusos y proteger los derechos de nuestros trabajadores", sin embargo, a nivel del gobierno central a fines de septiembre ya se contabilizaban por parte de la ANEP 5000 empleados públicos despedidos.

En el Mensaje anunció la corrección de "las malas prácticas que muchas veces distorsionan el concepto de empresa, recurriendo a múltiples RUTs, afectando negativamente los derechos de los trabajadores"<sup>50</sup>. Los empresarios se pronunciaron en contra<sup>51</sup>, sugiriendo cautela en las redefiniciones del concepto empresa<sup>52</sup>, por lo que a fines de agosto, la ministra del trabajo, Camila Merino, solicitó a los miembros de la oposición integrantes de la comisión legislativa respectiva que estaba viendo el proyecto de ley que modificaría el concepto de empresa no someter a votación el texto informándoles la intención del gobierno de ingresar un proyecto para

48 Una aguda reflexión sobre continuismo, en: Robert Funk, "La nueva forma de triangular", *El Mostrador*, 1 de junio de 2010. <http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/06/01/la-nueva-forma-de-triangular>

49 La personas entre 60 y menores de 75 años, que reciben una pensión inferior a \$ 250 mil, sólo cotizarán un 3% de las pensiones. Y si el monto de las pensiones es entre 250 mil pesos y \$ 500 mil impondrán un 5%. En caso de ser superior, se impondrá el 7%. En tanto, los mayores de 75 años con pensiones bajo los \$ 250 mil no pagarán cotizaciones a Fonasa. Y aquellos mayores de 75 con pensiones en \$ 250 mil y \$ 500 mil, pagarán un 3% y quienes superen los \$ 500 mil, cotizarán un 5%.

50 D&S, dueña del supermercado Líder, es la empresa retail que más Rut posee (133), le sigue Falabella (35) y Cencosud (los redujo de 43 a 10). Sodimac solo tiene uno.

51 Este anuncio dividió la opinión de los empresarios, pronunciándose a favor de la misma los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme). Sin embargo, otros sectores como la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Asociación Gremial de Supermercados de Chile (ASACH). [http://www.estrategia.cl/detalle\\_noticia.php?cod=30214](http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=30214)

52 Esta redefinición preocupó al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quién reiteró en que la definición actual era suficiente. [http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100526/cont\\_141875.html](http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100526/cont_141875.html)

sancionar “el abuso” de los multirrut<sup>53</sup>. El Presidente se comprometió a darle a la Superintendencia de Salud las mismas atribuciones regulatorias y de control para el sector público y privado y anunció nuevas protecciones al consumidor a través de la creación de un Sernac financiero, proyecto abandonado a fines de julio a cambio de una ampliación de las tareas en el ámbito financiero del actual Sernac. El conjunto limitado de medidas regulatorias más que una protección a los derechos ciudadanos estuvo orientado a mejorar la eficiencia del estado en la articulación mercado-privados.

Las reformas políticas fueron, quizás, los más relevantes anuncios. Incorporó en la agenda “primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular”; y se comprometió a “impulsar una profunda revolución descentralizadora, transfiriendo poder efectivo a las regiones y a los municipios, a través de la transferencia de funciones, atribuciones y recursos, desde el gobierno central a los gobiernos regionales y comunales, en un contexto de mayor flexibilidad y autonomía en su gestión y plantas de personal, respetando los legítimos derechos de los funcionarios municipales”. Junto a estas medidas descentralizadoras anunció la creación de la Academia de Gestión Regional y Municipal, la que “a través de convenios con las universidades e institutos regionales [permitirá] formar y capacitar a los funcionarios”, externalización que no dejó en claro el rol que tendría la asociación de municipalidades en este proceso. Finalmente, anunció la implementación de una Justicia Vecinal, como una “instancia temprana de resolución de conflictos menores”, para descomprimir los juzgados y darle a la vida en comunidad una nueva dimensión de resolución pacífica de disputas. Sin embargo, al compromiso por reconocer el “derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero”, -proyecto enviado anteriormente por la Presidenta Bachelet- le agregó un elemento restrictivo: “en la medida que mantengan un compromiso y sentido de pertenencia con nuestro país”, con lo que distorsionó la efectiva ciudadanía de los chilenos en el extranjero. Posteriormente, el ministro Larroulet indicó que esta agenda contendría reformas constitucionales para permitir plebiscitos comunales, la iniciativa popular de ley, elección de consejeros regionales y ley del Congreso. Del conjunto de iniciativas anunciadas “el actual gobierno solo ha generado dos iniciativas vía mensaje (sobre cambio de fecha de elecciones y declaración de intereses y patrimonio)”, las otras iniciativas fueron presentadas durante el gobierno anterior<sup>54</sup>.

En el Mensaje incluyó anuncios sobre nuevas y reformadas instituciones<sup>55</sup> y la introducción de políticas de mercado. En el área de trabajo extendió el bono especial existente para la capacitación, que subsidia al empleador, y el diseño de uno de intermediación laboral para ayudar a encontrar trabajo a personas de

53 *Diario Financiero*, 28 de agosto, 2010.

54 Fundación Dialoga, “Taller de Reforma Política, Informe N°1”, septiembre 2010.

55 Como la Dirección de Relaciones Laborales, el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, el Servicio País para la Educación, la Academia de Gestión Regional y Municipal, la Agencia Nacional de Emergencia ex Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Igualmente, se reformarían otras instituciones dando lugar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ex Minint), el Servicio Electoral (Servel), el Servicio de Protección de la Infancia y la Adolescencia (ex Sename) y la Agencia de Desarrollo Indígena (ex CONADI).



baja calificación, a través de agencias dedicadas a buscar trabajos estables para personas vulnerables en situación de cesantía. Otras medidas como la adaptabilidad horaria y turnos en las regiones, el teletrabajo y las ocupaciones desde hogar se ampliarían la flexibilización laboral y el estatuto especial para el trabajador agrícola y mujeres temporeras será tema de especial escrutinio en la perspectiva de los derechos laborales. El programa "Comprométete con una Escuela" y "Comprométete con un Niño" diseñado para que fundaciones, empresas y profesionales apoyen con recursos económicos y medios humanos a los establecimientos más pobres o apadrinen a niños de escasos recursos, versión adaptada de los programas de responsabilidad social empresarial, dejará en manos del sector privado el apoyo a aquellos establecimientos de su predilección. Otras medidas como "la inversión en energía, particularmente la hidroeléctrica" que necesitaría ser incrementada "removiendo los obstáculos burocráticos que hoy la dificultan"; el financiamiento del Transantiago; hasta el bono por 50 años de matrimonio, fueron todos temas vistos desde una perspectiva mercadista, por lo que el anuncio del "fortalecimiento de la institucionalidad de las aguas" generó serias aprehensiones.

En suma, el primer Mensaje presidencial mostró a un ejecutivo proponiendo al país algo de regulación y mucho de mercado, una articulación público-privada de nuevo tipo en la que el rol del estado sería el poner en práctica un nuevo modelo priorizando al sector privado como eje de todos los cambios.

#### LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL IMPLEMENTADA.

El manejo del estado –distinto al de una empresa privada- se convirtió para el ejecutivo en un desafío difícil de superar en el corto plazo, siendo la *real politik* un condicionante de parte de sus acciones, algunas de las cuales olvidaron sus iniciales tonos conciliadores.

En este primer período el Presidente Piñera sinceró los anuncios y promesas electorales: el salario ético situado en los \$240 mil pesos ahora solo estaría compuesto por el salario mínimo más subsidios directos a los sectores de más bajos ingresos; el royalty minero congelaba todo cambio impositivo hasta el 2020; la reforma tributaria sería por una sola vez recaudando el estado en 2013 menos que en 2010; y la extensión del post natal sería una flexibilización más que una extensión neta de días<sup>56</sup>.

Igualmente, la gestión gubernamental en campos determinados mostró fuertes diferencias con el discurso y llamados unitarios iniciales fluctuando entre una aproximación dialogante y una confrontacional con la oposición. Para crear nuevos espacios de interlocución política, replicó la estrategia participativa de la Presidenta

56 "La subsecretaria del Sernam, María Paz Lagos, señaló que la propuesta inicial del Gobierno apunta a flexibilizar el post natal de 45 días para el pre y 84 para el post de manera de poder traspasar días del primero al segundo y ver la factibilidad de optar por un retorno paulatino al trabajo hasta llegar a los 6 meses". [http://www.puntomujer.emol.com/mujer\\_y\\_trabajo/noticia/detallenoticia.asp?id=%7B807F87A1-AF79-479F-90D2-3B9C4841C964%7D](http://www.puntomujer.emol.com/mujer_y_trabajo/noticia/detallenoticia.asp?id=%7B807F87A1-AF79-479F-90D2-3B9C4841C964%7D)

Bachelet creando las comisiones "Técnica del Salario Mínimo"<sup>57</sup>, "Mujer, Trabajo y Maternidad"<sup>58</sup>; el "Panel de Expertos para una Educación de Calidad"<sup>59</sup> y, producto del derrumbe en mina San José, la de "Seguridad en el Trabajo"<sup>60</sup>.

La postura más cercana al diálogo se vinculó a las dificultades que la administración Piñera comenzó a enfrentar tanto en sus relaciones con el empresariado producto de la necesidad de aumentar de impuestos para financiar la reconstrucción post terremoto, así como con las dificultades que enfrentaría en el Congreso siendo la Alianza minoría. Por tales razones, a comienzos de abril se comenzaron a escuchar voces de miembros de la Coalición por el Cambio mostrando la necesidad de entregarle al presidente facultades extraordinarias<sup>61</sup>. Así, el presidente del PRI, Adolfo Zaldívar, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, se reunieron Piñera para entregarle un proyecto de ley que ampliaba las facultades del Ejecutivo para enfrentar las consecuencias del terremoto. Sorprendentemente, la crítica estas las facultades extraordinarias provino desde una alarmada derecha cuando *El Mercurio* editorializó en contra de las mismas<sup>62</sup>, lo que terminó por sepultar la iniciativa.

Los iniciales llamados a la unidad nacional fueron rápidamente desplazados por la fuerte y sostenida ofensiva gubernamental contra los sectores opositores y el gobierno de la Presidenta Bachelet. Igualmente, la política de continuidad se vio alterada por importantes cambios a través de imperceptibles modificaciones institucionales como, por ejemplo, la eliminación de la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO) de la Dirección del Trabajo, lo que debilitó fuertemente su estrategia inspectiva<sup>63</sup>. Estos cambios institucionales vía decretos dejaron fuera de la capacidad de control del congreso a un sinnúmero de servicios estatales.

Los temas que primaron entre el 11 de marzo y el 18 de septiembre permitieron visibilizar la autonomización relativa del ejecutivo respecto de sus fuerzas de apoyo y su búsqueda permanente de popularidad, su compromiso con la ampliación de los mecanismos de mercado, el copamiento del estado a través de despidos y los ataques a la Concertación, así como parte de sus compromisos valóricos. Estos elementos se manifestaron a propósito del conflictivo plan de reconstrucción; los

57 Harald Beyer, CEP; CUT y UNT, Roberto Morales y Juan Carlos Scapini; Pablo Bosch, gerente general de B. Bosch; Alfonso Sweet, Forus; Conapyme, Carlos Boada; académicos: Bernardita Vial, Alejandra Mizala, Joseph Ramos, Ricardo Paredes, Cristóbal Hunneus, y Raffhael Bergoeing.

58 María Gracia Cariola (SNA), presidenta. María Elena Valenzuela (OIT), Paula Bedregal (PUC), Osvaldo Larrañaga (PNUD), Francisca Dussaillant (CEP) Ana Bell Jaras (CUT/PS), Susana Carey (Comunidad Mujer), Carmen Domínguez UC, Álvaro Pizarro (Abogado laborista, Ex Director Nacional del Trabajo (1974-1976), Ximena Luengo (Instituto Chileno De Medicina Reproductiva), Andrea Tokman (UDP), José Ramón Valente (Econsult), Rodrigo Cerda (ministerio de Hacienda), Ricardo Solari.

59 José Joaquín Brunner, Sergio Molina, José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, Pilar Romaguera, Jaime Pavez, Pablo Zalaquett, Pedro Pablo Rosso, Patricia Matte, Julia Alvarado, Andrea Krebs y Harald Beyer, presidente.

60 La ministra del Trabajo, Camila Merino, encabeza la comisión, junto a Olga Feliú, Marcelo Alborno, Carlos Portales, Mónica Titze, Pablo Inhnen, Víctor Riveros, Víctor Araya, Nicolás Starck y María Elena Gaete, secretaria ejecutiva. Dado que no se invitó a ningún representante sindical, la CUT y el PS constituyeron ayer una comisión para proponer reformas en materia de seguridad laboral.

61 Pablo Rodríguez Grez, "Facultades extraordinarias", *El Mercurio*, 4 de abril, 2010, página A2.

62 "¿Facultades extraordinarias al Presidente?" *El Mercurio*, 13 de abril, 2010, página A2. Una muestra más de la distancia que el empresariado tomaba respecto de un posible autocrático ejecutivo.

63 Cfr. <http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-61399.html>

derechos humanos y la propuesta de indultos de la Iglesia Católica; ciertos signos de ineficiencia; los despidos de funcionarios gubernamentales del antiguo régimen y la contratación de nuevos de sus propias filas; la ampliación del mercado en la gestión estatal; los derechos de las mujeres; la crítica a la Concertación; y la política comunicacional coparon la agenda.

a) El Plan de Financiamiento de la Reconstrucción acordado finalmente con la oposición estableció, contra la opinión de algunos de sus partidarios, aumentos transitorios de las contribuciones (Impuesto de Primera Categoría y del Impuesto Territorial) a las propiedades de mayor avalúo fiscal, a excepción de los predios agrícolas; un alza permanente del Impuesto Específico al Tabaco; fijó beneficios tributarios a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) para la reinversión de utilidades; rebajó a 0,6% el Impuesto de Timbres y Estampillas; restringió a un máximo de dos las propiedades que una persona natural puede acoger a los beneficios del DFL-2; excluyó como renta para fines tributarios los depósitos convenidos por hasta 900 UF acumulados al año; y autorizó el traspaso de fondos de la Ley Reservada del Cobre para fines de la reconstrucción por US\$ 300 millones anuales en 2010 y 2011. Sin embargo, la Comisión Mixta del Congreso rechazó la propuesta del royalty minero del gobierno por mantenerse la invariabilidad tributaria hasta el 2025, por lo que los parlamentarios propusieron ver el tema del royalty fuera del marco del Plan.

b) Los derechos humanos fue una de las áreas de mayor conflictividad en la que se expresó en forma más clara la primacía de la opinión pública por sobre la demanda de derecha. Aun cuando en el mes de junio se redujo el personal del Programa de Exonerados Políticos del ministerio del interior; y la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la ex ministra de Bienes Nacionales de Bachelet, Romy Schmidt, rechazó el recorte presupuestario de \$300 millones, el tema que centró la atención fue el indulto bicentenario.

La iniciativa gubernamental había partido con la reunión sostenida entre la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rossy Lama, con abogados de militares procesados para explorar su inclusión en el indulto promovido por la Iglesia Católica. Sin embargo, en contra de este indulto se pronunció una sólida y transversal mayoría: la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los ex presidentes de la república y la oposición en su conjunto, a los que inesperadamente se sumaron, en contra de esta facultad presidencial, el ministro del Interior, el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandon (RN), la senadora Lily Pérez (RN), el presidente de la UDI, José Antonio Coloma, hasta el presidente de la Corte Suprema. Por su parte, la mesa ampliada de Iglesias Evangélicas presentó su Propuesta para el Indulto Bicentenario, excluyendo los delitos de lesa humanidad.<sup>64</sup> La reacción negativa de opinión pública, nuevamente, llevó al Presidente en cadena nacional de TV el domingo 25 de julio en la mañana

64 *La Segunda*, 22 de julio, 2010.

a pronunciarse en contra de una ley de indulto, lo que fue aplaudido por la opinión pública y dejó en una alicaída condición a la Iglesia Católica.

c) La gestión de la administración durante este período se apartó de la imagen de eficiencia que los *pendrives* con tareas ministeriales y los cronómetros de los subsecretarios habían inicialmente proyectado, apareciendo muestras de ineficiencia gubernamental en el proceso de reconstrucción (por ejemplo, la demora en pagar a municipalidades los gastos del terremoto y retirar escombros; el catastro del Comité de Reconstrucción constando más de tres mil familias recibiendo mediaguas sin ser damnificadas por falta de prolijidad en los chequeos; el bajo porcentaje de ejecución ministerial del presupuesto); la poca relevancia de las propuestas legislativas; y retrocesos que golpearon a la gestión recién iniciada. La salida de la coordinadora general del Transantiago, Ana Luisa Covarrubias, aun cuando fue justificada como una forma de fortalecer el rediseño de este sistema de transporte, comenzó a mostrar las primeras bajas en la coalición gobernante comprometida con una mejor gestión.

d) La política más conflictiva fueron los despidos masivos de la administración pública contradiciendo las iniciales declaraciones presidenciales de cohabitación, las que fueron rápidamente desplazadas por una política de desalojo. El nuevo gobierno debía nombrar, además de su gabinete, 1.306 funcionarios de confianza y 851 seleccionados por el sistema de Alta Administración Pública. Para ello, el equipo de transición de Piñera elaboró una metodología de traspaso de gobierno que en vez de tranquilizar los ánimos comenzó a levantar sospechas de futuras persecuciones a ex funcionarios gubernamentales.

Desde el sector político triunfante se escucharon voces pidiendo una reforma del estado que distinguiera entre empleados fiscales y "operadores políticos"<sup>65</sup>. La demanda de erradicar supuestos operadores políticos se volvió a repetir, a mediados de abril, en la queja de la Alianza ante el gobierno denunciando que en "la Segpres, la Segegob, el MOP el Minvu, la DOS (División de Organizaciones Sociales) y muchos municipios, estarían aún colonizados por funcionarios concertacionistas. En la DOS, fuentes de Gobierno hablan de, al menos, 150 funcionarios sindicados como 'operadores' "<sup>66</sup>. Especial preocupación causó el instructivo de la intendenta de Atacama, en el mes de mayo, quién solicitaba datos de pertenencia política y sindical de todos los funcionarios públicos de la región, lo que llevó a la ANEF a presentar la primera denuncia formal por persecución política<sup>67</sup>.

Pero estas tensiones también alcanzaron al interior de la Alianza. A finales de abril el Ministro de Planificación, Felipe Kast (UDI), -sobrino del rival del presidente del partido- le pidió la renuncia a la dirección del FOSIS a Pablo Coloma (PPD), hermano del presidente de la UDI. A la necesidad de poner gente de ese partido en

65 [http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia\\_id=17855&categoria\\_id=61](http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=17855&categoria_id=61)

66 "La queja de la Alianza a La Moneda por los operadores políticos que aún trabajan en el Gobierno", *El Mercurio*, 18 de Abril de 2010.

67 *El Mercurio*, 11 de mayo, 2010, página C2. Según la ANEF, desde que asumió Piñera hasta mediados de mayo más de mil funcionarios públicos fueron cesados de sus labores por ser simpatizantes de algún partido de la Concertación. [http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia\\_id=19642&categoria\\_id=54](http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=19642&categoria_id=54)

regiones y reemplazar funcionarios elegidos por la Alta Dirección Pública se sumó al conflicto de intereses generado por la presencia de la jefa de asesores, María Luisa Brahm, como consejera del mismo.

Desde que asumió Piñera hasta mediados de julio cinco mil trabajadores habían dejado la administración pública, 2.500 despedidos directamente, otros dos mil cuyo contrato venció el 31 de marzo o a fines de junio y los 500 restantes renunciaron a sus cargos por diversos motivos<sup>68</sup>. Esta política de despidos fue decididamente apoyada por el senador Alberto Espina (RN)<sup>69</sup>, lo que fue reafirmado por el Presidente Piñera<sup>70</sup>, pero que recibió un revés con la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a la Contraloría detener notificaciones de despidos en ChileDeportes<sup>71</sup>. Igualmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a tramitación el recurso de protección presentado para dejar sin efecto los despidos injustificados realizados en la seremi de Educación de la V Región<sup>72</sup>. No obstante esta política continuó con el despido director del Centro Nacional de Abastecimiento, Cenabast, Aldo Yáñez, y del director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Fernando López. En el Ministerio de Energía, habiendo sido inicialmente confirmada por Piñera, se le pidió la renuncia a la superintendente de Electricidad y Combustibles, Patricia Chotzen, después de nueve años en esa institución y en el Ministerio de Economía ocurrió lo mismo con la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Mariana Schkolnik. El conjunto de destituciones de funcionarios elegidos por la Alta Dirección Pública alcanzó en agosto de 2010 al 42% del total de puestos concursados por lo que el gobierno fue cuestionado por dejar en fojas cero las intenciones profesionalizantes del proyecto que creó esta repartición pública.

c) Siguiendo con la orientación de introducir mecanismos de mercado en todo el sistema estatal el Ministerio de Obras Públicas anunció la intención de licitar diez proyectos a concesionar por un total de US\$ 3.200 millones por un período de operación mayor al habitual, llegando "a lo que la ley permite, a los 50 años", según el ministro Hernán de Solminihac, quién a mediados de junio formalmente anunció el plan de concesiones 2010-2014, el que se empinó a los US\$ 8 mil millones. El programa fue dado a conocer a los representantes de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de Ingenieros. El monto de las licitaciones, se indicó, podría aumentar debido a que existen iniciativas que se encuentran en estudio por

68 *Cambio21*, 18 de julio, 2010.

69 *El Mercurio*, 7 de junio, 2010

70 *La Segunda*, 10 de junio, 2010.

71 "Es una razzia política ya que contratan operadores políticos de la UDI" dicen dirigentes sindicales. *Cambio21*, 5 de julio, 2010.

72 El enojoso clima de persecución política quedó de manifiesto en las declaraciones -a través de Twitter- del concejal de Concepción, Fernando González, al Seremi de gobierno, Francisco Ibieta, asegurando que "a punta de balazos deberían sacar a la tropa de upelientos que aún hay en el gobierno regional... con dos militares se te arrancan". *La Nación*, 11 de julio, 2010.

US\$3.730 millones y que, de concretarse, la inversión podría superar los US\$ 11 mil millones<sup>73</sup>.

Por su parte, el ministro de minería, Laurence Golborne, se propuso modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras otorgando concesiones para la explotación del litio permitiendo la entrada de la inversión extranjera y otorgando permisos a transnacionales mineras. Con este piso legal se abriría el mercado a la inversión extranjera ya que de acuerdo a la legislación vigente solamente SQM y la Sociedad Chilena del Litio (SCL Chemetall) tienen contratos de explotación firmados con CORFO antes de que la Ley 18.097 de Concesiones Mineras y el nuevo Código de Minería impidieran la concesión del litio. Estas empresas producen 60 mil toneladas anuales y representan, en conjunto, cerca del 60% de la oferta mundial de carbonato de litio<sup>74</sup>. Aun cuando el litio había sido catalogado como recurso estratégico para el país y el propio ministro Golborne destacó su importancia, posteriormente lo minimizó como mineral estratégico afirmando que “se trata de un área menor en Chile”<sup>75</sup>, pavimentando así el camino a su reclasificación retirándole el carácter de mineral estratégico para su posterior licitación internacional. Contradiciendo tal postura, a comienzos de agosto afirmaba que “tomando las medidas correctas podemos soñar con que el litio algún día tenga la importancia que hoy tiene el cobre para nuestro país. La decisión es nuestra, y necesitamos partir por la voluntad de revisar las reglas que enmarcan a la industria, que hoy no responden ni a la realidad del país ni a la del resto del mundo”<sup>76</sup>.

Esta misma impronta de mercado se manifestó en el campo de la educación superior donde el gobierno se ha movido en la dirección de promover una institución asociativa única que agrupe a todas las universidades, modificando los procedimientos de asignación de recursos al aumentar la proporción dentro del presupuesto universitario de aquellos fondos otorgados vía fondos concursables; haciendo partícipes de ellos a todas las instituciones universitarias; creando un subsidio portátil o sistema único de créditos y becas, donde los beneficios los reciban los alumnos, sin importar el lugar donde estudien; ampliando el sistema

73 Entre las obras que más destacan se encuentra el llamado a licitación de la Autopista Vespucio Oriente, cuyo llamado se concretará el próximo año y alcanzaría una inversión de US\$1.172 millones. Además se anunció la construcción de la Costanera Central, otra importante carretera urbana que beneficiará al sector sur de Santiago, en especial a los residentes de La Florida y Puente Alto. Esta última considera una inversión de US\$1.184 millones. Además, se confirmó el programa de concesiones hospitalarias que incluye los recintos de Antofagasta, Curicó, Cauquenes, y a los hospitales Sotero del Río, Félix Bulnes y del Salvador, todos por una inversión de US\$1.338 millones. También se incluyen algunas obras en regiones como el Proyecto de Revitalización Urbana del Estero Marga Marga en Viña del Mar (US\$84 millones), la interconexión Vial Logística Interportuaria de Concepción (US\$371 millones) y la relicitación del aeropuerto de Cerro Moreno de Antofagasta (US\$26 millones). *El Mercurio*, 16 de julio, 2010.

74 Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería, en Chile se concentra más del 70% de las reservas de litio en el mundo, de las cuales sólo el 40% están operativas en los yacimientos del Salar de Atacama. Su uso está asociado a diversas industrias: farmacéutica, electrónica, nuclear y automotriz, utilizándose en los vehículos híbridos o eléctricos. De acuerdo a la demanda internacional, su consumo se ha duplicado, de 45 mil toneladas en los noventa a más de 100 mil toneladas entre los años 2007 y 2008.

75 *La Tercera*, 19 de junio, 2010, página 28.

76 Laurence Golborne, “El litio: ¿estratégico y no concesible?”, *El Mercurio*, 5 de agosto, 2010; página A2.

Becas Chile para estudiar en el país; y proporcionando más información sobre las universidades.

No obstante estas claras orientaciones privatizadoras, los resultados de la encuesta CEP de julio que mostraron un muy bajo apoyo a la venta de acciones estatales en empresas públicas (30%), lo cual inhibió momentáneamente la propuesta de privatización de las sanitarias.

d) En el campo laboral de las mujeres, voces desde la derecha comenzaron a pronunciarse contra cualquier esbozo de acción afirmativa. Así, Francisca Valdés, Directora Ejecutiva de Mujeres Empresarias afirmaba que para ayudar a las mujeres “la mejor manera [...] es promocionar a la mujer por sus capacidades, por su forma complementaria de abordar los problemas, porque en definitiva se la puede, porque está preparada para ello y no por equiparar el número de hombres en esos cargos. Seamos pacientes. Es cosa de tiempo. Pero seamos activos y asertivos en la elección de las mejores personas”<sup>77</sup>. Semanas más tarde, la recientemente nombrada ministra del SERNAM coincidía con estos planteamientos cuando señalaba que “pretender que en todos los puestos vamos a tener paridad, no es realista, no tenemos mujeres para eso” y avanzaba propuestas de flexibilización para incrementar la tasa de participación femenina proponiendo rebajar el post natal de 18 a 10 semanas pero con jornada parcial<sup>78</sup>.

La minuta del departamento de estudios del SERNAM, filtrada a la prensa en la que recomendaba a los jóvenes a abstenerse del sexo antes del matrimonio fue un claro ejemplo –desautorizado por la ministra– del tipo de orientaciones ideológicas que han tenido presencia en el seno del gobierno<sup>79</sup>.

e) A nivel de los medios de comunicación, una señal de cómo sería el manejo de la prensa la dio el candidato triunfante cuando concedió entrevistas solo a condición de que no se le interrogara acerca de sus negocios y el estado en que se hallaba la promesa de desprenderse de ellos<sup>80</sup>. De la misma forma, la propia prensa comenzó a cambiar su lenguaje. Así, frente a la presión de la UDI y RN por una mayor presencia de sus militantes en el gabinete informaban que “el Presidente escuchó la opinión de los partidos”, o cuando Piñera designó en el gobierno a candidatos derrotados en la últimas elecciones, comentaba que “se aprovechará la experiencia política para el mejor aprovechamiento de sus funciones públicas” dejando atrás

77 Francisca Valdés, “Sacando lecciones de género”, *La Tercera*, 5 de febrero, 2010.

78 Diana Massis, “Insistir en la paridad es poner la carreta delante de los bueyes”, *COSAS*, N°573, 24 de marzo, 2010, páginas 56 y 58.

79 Cfr. María de los Ángeles Fernández, “El ‘neomachismo’ de la nueva forma de gobernar”. <http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/09/16/el-%e2%80%9cneomachismo%e2%80%9d-de-la-nueva-forma-de-gobernar>

80 “Sebastián Piñera o, lo que es lo mismo, quienes dependen de él concedieron entrevistas a condición de que no se le interrogara acerca de sus negocios y el estado en que se hallaba la promesa de desprenderse de ellos”. Carlos Peña, “Piñera y la prensa”, *El Mercurio*, Columnas y blogs, 24 de enero, 2010.

las críticas al cuoteo y “premios de consuelo”<sup>81</sup>. De esta forma, un tercio de los candidatos derrotados de la Alianza terminaron ocupando cargos en el gobierno<sup>82</sup>.

f) Una destacada dimensión de la política gubernamental fue la sostenida crítica a los gobiernos de la Concertación, en especial el de Bachelet. El 68% de opinión pública a favor de un nuevo gobierno bacheletista contrastó con el 54% de aprobación al presidente y un aumento al 33% de rechazo, informado por la encuesta CERC del 23 de junio, la aprobación más baja de las recibidas por los cinco presidentes elegidos desde 1990. En este escenario la figura de la ex mandataria ocupó un lugar central en tales críticas, focalizándose en dos áreas sensibles: la efectividad de los programas sociales implementados y los actos de corrupción de sus funcionarios. Política que se mostró definitivamente equivocada al conocerse la encuesta CEP de julio que le dio un 77% de apoyo a la forma como la Presidenta Bachelet condujo su gobierno.

La crítica a la efectividad de los programas sociales se confundió con y sirvió de base a la reformulación de los mismos, por lo que a comienzos de junio el presidente del Senado, Jorge Pizarro, denunciaba el estancamiento de los beneficios sociales de Subsidio Único Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal<sup>83</sup>. Pero los resultados de la encuesta CASEN -que mostraron un aumento de la pobreza del 13,7% (2006) al 15.1%(2009)- permitieron al ministro de planificación, Felipe Kast, afirmar que en el país “hay que tener políticas públicas mucho más efectivas” para derrotarla y al Presidente Piñera anunciar la “evaluación flash” de 298 programas sociales con el fin de decidir su continuidad<sup>84</sup> y un proyecto de ley para crear el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de todos los programas sociales del gobierno de manera de controlar que los recursos lleguen donde están destinados<sup>85</sup>. Estas declaraciones forzaron a la Presidenta Bachelet a salir en defensa de su política social indicando que sin ella los efectos habrían sido peores y estimar como útil una evaluación de esas políticas<sup>86</sup>. De acuerdo a especialistas, el ministro omitió el incremento de los precios de los alimentos en ese período y el que esa fuera la primera Casen que se realizó durante un año de recesión, lo que habría afectado los resultados.

Sin embargo, las declaraciones más conflictivas las hizo el propio Presidente cuando afirmó que “todos lo sabemos, muchas veces los recursos no llegan a quienes realmente lo necesitan. O porque los recursos se quedan entrapados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o porque sencillamente se pierden en las garras de la corrupción”<sup>87</sup>. Dadas las reacciones ante la gravedad de sus dichos tuvo que enmendar rumbos y en una especial cadena nacional de TV afirmando que en la opción de “enfascarnos en divisiones o peleas pequeñas,

81 Jorge Donoso Pacheco, “Designación de subsecretarios”, *El Mercurio*, 20 de febrero, 2010, A2.

82 *El Mercurio*, 18 de abril, 2010, página C5.

83 “Este año se ha resuelto ‘congelar’ estos beneficios sociales, que en suma se entregan a cerca de 2 millones de familias, no reajustando los valores que la propia ley establece se haga los 1º de julio de cada año”. “El silencioso congelamiento de la Red de Protección Social”. *Cambio 21*, 1 julio, 2010. [http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia\\_id=20477&categoria\\_id=64](http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=20477&categoria_id=64)

84 *Cambio21*, 8 de julio, 2010.

85 *La Tercera*.Com. 14 de julio, 2010.

86 *La Nación*, 26 de julio, 2010.

87 *La Nación*, 14 de julio de 2010.



o bien unirnos con generosidad y con grandeza, para enfrentar las verdaderas causas de la pobreza. Nuestro gobierno ha optado firmemente por el segundo camino". Desde sus propias filas salieron críticas a tal política, siendo categórico el senador Longueira (UDI) al indicar que le "pareció innecesario que vinculara las denuncias que se han conocido a las razones por las cuales llegamos a estas cifras", advirtiendo que en este tema no hay que "buscar culpables" y que, es precisamente su uso político el responsable del fracaso de "muchas de las políticas para erradicar la pobreza"<sup>88</sup>, postura a la que se sumó el alcalde de Puente Alto, José Manuel Ossandon (RN). No obstante, el gobierno persistió en organizar esta política de desprestigio tal como el memorándum de la Secretaría de Comunicación (Secom) lo consignó entregando los lineamientos comunicacionales para enfrentar a la oposición e identificando como "adversarios" del gobierno a "la oposición por negarle los US\$ 1000 millones para la reconstrucción y por ser los creadores y diseñadores del Transantiago", agregando que el "terremoto y el maremoto, los delinquentes y los narcotraficantes, las irregularidades, los operadores políticos y la mala distribución del ingreso", eran los enemigos de la administración<sup>89</sup>.

El segundo ángulo fueron los ataques por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración Bachelet, como el apoyo financiero a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), lo que posteriormente fue descartado por la directora de presupuesto Rossana Costa<sup>90</sup>. Continuaron denuncias respecto del gasto en viáticos del estado, el que habría crecido en 1.000% en los últimos 20 años; el desorden en gastos en el Ministerio de la Cultura; un supuesto déficit de \$4.500 millones de pesos en remuneraciones en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji); irregularidades en otorgamiento de becas Conicyt; y los posibles vicios en antiguas asesorías del Transantiago. La más grave situación denunciada fueron las irregularidades en la Intendencia de Valparaíso por lo que el gobierno solicitó una auditoría de todos los gastos de las intendencias en los últimos días del gobierno bacheletista. Los diputados RN Cristián Monckeberg y el UDI Gustavo Hasbún, adquirieron protagonismo en este campo de denuncias. Sin embargo, el escándalo por la acusación contra el alcalde de la municipalidad de Colina, Mario Olavarría, vicepresidente de la UDI, por el delito de cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes al supermercado Tottus en esa comuna, le quitó fuerza a esta estrategia.

Lo más grave entre estos temas fue el trascendido del almuerzo del Presidente Piñera y los parlamentarios de la Alianza, en Cerro Castillo, donde habría instado a redoblar los esfuerzos a la hora de fiscalizar la gestión de Michelle Bachelet

88 *El Mostrador*, 14 de julio, 2010.

89 *El Mercurio*, 28 de julio, 2010, página C4.

90 "Yo no encontré ilegalidades con la información que tengo disponible hasta el momento", dijo Rossana Costa, tras asistir a la comisión investigadora de las transferencias de recursos a ONGs en el gobierno de Michelle Bachelet. *La Nación*, 12 de agosto, 2010.

indicando que "hay un listado de irregularidades sobre las que les podemos informar"<sup>91</sup>.

Otra política seguida por el gobierno fue la sistemática crítica y descalificación de los proyectos y programas bicentenario implementados por los gobiernos de la Concertación, como el apoyo financiero al *Teatro Teletón* (al que posteriormente se le reasignaron recursos), la Comisión Bicentenario, la remodelación del Estadio Nacional y la Ciudad Parque Bicentenario de Los Cerrillos.

---

#### LA CONCERTACIÓN EN LA OPOSICIÓN

Pasada la catarsis de la derrota, que tensionó las relaciones inter partidarias y paralelo a la renovación de sus dirigencias partidarias, que complicó sus relaciones intra partidos, la Concertación dio sus primeros pasos como oposición. Por una parte, debía heridas al tiempo que hacer una sincera autocrítica. Por la otra, posicionarse frente al nuevo gobierno sin "negar la sal y el agua" para no perder el escaso apoyo con que contaba, pero al mismo tiempo desplegar iniciativas opositoras. En sus primeros seis meses como oposición la Concertación recién inició parte de sus tareas, dejando pendiente una profunda autocrítica y propuestas opositoras que le permitan recuperar el apoyo perdido.

Así, al primer cónclave concertacionista en el estadio El Llano de San Miguel, en abril, le siguió en el mes de mayo una reunión en la residencia particular del senador Frei para enfrentar el tema de los municipios, la que se repitió en junio con todos los alcaldes del país para delinear la estrategia de cara a la elección municipal. De igual forma, los ex presidentes Frei y Lagos aparecieron en varias oportunidades criticando conjuntamente el actuar del gobierno Piñera en el proyecto de ley de reconstrucción y el royalty minero. Con todo, de acuerdo con la encuesta del CEP, al final del mes de julio la Concertación recibía un pobre 29% de aprobación ciudadana, caída también reflejada en la encuesta Adimark presentada a comienzos de agosto.

Quizás el elemento aglutinante que necesitaba lo proporcionó el gobierno con su permanente ataque a la obra concertacionista y el gobierno Bachelet, frente al cual sus dirigentes salieron a defender la herencia gubernamental. Igualmente, en el congreso la Concertación logró congelar la ley de Televisión Nacional y el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de Televisión hasta que se vendiera definitivamente *ChileVisión*; fue capaz de modificar la propuesta a la ley de donaciones otorgando "facultades a la Contraloría para que fiscalice el uso de los fondos que se recaudarán y se eliminó la retroactividad, lo que -en la práctica- impedirá que quienes hicieron donaciones durante la *Teletón* que se realizó el 5 y 6 de marzo se beneficien de esta ley [...] eliminó la creación del controvertido Comité Ejecutivo para la Reconstrucción que integraba el Presidente Sebastián Piñera y

91 *Cambio 21*, 30 de junio, 2010. Ver también: "Elaborado por La Moneda. Documento revela irregularidades en aportes de Bachelet a ONGs". *El Mostrador*, 27 Junio, 2010

que -según el texto original- administraría los fondos de acuerdo al texto original (y) estableció que los fondos serán administrados por el Ministerio de Hacienda<sup>92</sup>; pudo eliminar del proyecto de ley de reconstrucción la depreciación acelerada; y redefinió el espacio de la discusión sobre el *royalty*.

Con una postura constructiva, los senadores Camilo Escalona (PS), Ignacio Walker (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) elaboraron un proyecto de ley (no considerado) que crearía una Agencia para la Reconstrucción Nacional, la que permitiría coordinar los esfuerzos públicos y privados para reparar los daños producidos por el terremoto, dando mayor transparencia y control sobre el conjunto del proceso. Igualmente, el Presidente Lagos formuló una propuesta de reconstrucción que vinculaba la forma de financiamiento de esta con el desarrollo de un proyecto consensuado del país que se quería construir<sup>93</sup>.

Producto de la propuesta de financiamiento del fondo de reconstrucción elaborado por el gobierno -que contemplaba un aumento del impuesto a las grandes empresas- las relaciones oposición-gobierno dieron paso a una nueva forma de relacionamiento abriéndose espacios de comunicación entre las directivas partidarias de la Concertación y el Presidente, modificándose propuestas legislativas aun cuando subsistieron diferencias respecto al alza de tributos que la oposición proponía convertirlas en permanentes y el gobierno las consideraba una medida temporal<sup>94</sup>. Más adelante, el documento laboral conjunto entre el diputado Osvaldo Andrade (PS) y el senador Pablo Longueira (UDI), "Más y mejor sindicalismo para una mayor equidad" y la propuesta "Gran pacto nacional para superar la pobreza" de los diputados Osvaldo Andrade, Sergio Aguiló, Denisse Pascal y Juan Luis Castro, aspiraban llegar a consensos con el gobierno y la alianza en torno a estos temas<sup>95</sup>. Otras iniciativas similares, tal como la reunión de la bancada de diputados demócratacristianos con el ministro de Planificación, Felipe Kast, para abordar los temas relativos a la superación de la pobreza, la creación de un nuevo ministerio de Desarrollo Social y la red de protección social impulsada por los gobiernos de la Concertación. Gestiones, finalmente se tradujo en un acuerdo Alianza y Concertación para crear en el Senado una comisión conjunta sobre la pobreza. De la misma forma, el acuerdo entre el intendente, alcaldes, empresarios, universidades y parlamentarios suscribiendo 10 medidas de probidad y transparencia en la Vª región, así como el acuerdo final en torno al financiamiento del Transantiago, continuaron esta dinámica colaborativa.

Terminado el proceso de renovación de sus directivas partidarias, los partidos de la Concertación iniciaron una revisión de su política opositora y comenzaron a adoptar nuevas posturas en vistas de la elección municipal de 2012, tema en el cual la inclusión del PC volvió a remover las aguas demócratacristianas.

92 *La Nación*, 22 de abril, 2010.

93 Carta abierta de Ricardo Lagos Escobar, "La tarea de Chile hoy: reconstruir y avanzar". *La Tercera*, 21 de marzo, 2010.

94 Esta postura concertacionista, en opinión de algunos analistas, fue una sobreactuación al aplaudir las iniciativas gubernamentales como el alza de impuestos a las grandes empresas sin mostrar los aspectos críticos de ella. Jorge Navarrete, "Un sabroso gato por liebre", *La Tercera*, 25 de abril, 2010, página 4.

95 *La Nación*, 2 de agosto, 2010.

---

## LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

Las consecuencias que podría tener la huelga de hambre de los comuneros mapuche sobre la aprobación presidencial, los efectos de la partida de la ex Presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, así como la forma en que se resolverán las tensiones intra partidarias en la Concertación y las características y conflictos que generará el debate presupuestario, serán temas centrales del próximo semestre.

La huelga de hambre fue el principal hecho político que junto a las celebraciones del Bicentenario cerraron este primer ciclo gubernamental. Aun cuando el ejecutivo se abrió a crear una mesa de diálogo, tanto su agenda como los miembros de la misma fueron rechazados por los voceros de los huelguistas, producto de lo cual el gobierno se abrió a una segunda mesa específicamente para tratar la huelga de hambre dado que el desenlace de esta huelga de hambre tendrá efectos indudables sobre la aprobación presidencial<sup>96</sup>.

Al mismo tiempo, esta huelga creó tensiones al interior de la Concertación cuando la presidenta del PDD, Carolina Tohá, afirmó que había sido un error aplicar la ley antiterrorista contra los mapuches. Estas afirmaciones llevaron al nuevo presidente de la DC a tomar distancia de tales afirmaciones y al ministro del interior de aquel entonces, Edmundo Pérez Yoma (DC), a señalar que la decisión había sido de la propia presidenta Bachelet.

Especial efecto tuvo la postura del senador DC, Hosain Sabag, el que durante la discusión de la reforma a la ley anti terrorista le dio su voto al oficialismo para mantener la figura del incendio como terrorismo con lo cual quebró la unidad concertacionista, ante lo cual en nuevo presidente democristiano, Ignacio Walker, reaccionó afirmando que "desde el día de hoy, a partir de esta votación, la oposición que tenemos en el Senado es más bien teórica".

Por su parte, sorpresivamente la ex presidenta Michelle Bachelet aceptó el nombramiento, antes rechazado, por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon para encabezar la nueva agencia creada por la Asamblea General de Naciones Unidas para los asuntos de la mujer (ONU-Mujer) con rango de subsecretaria general. Este alejamiento del ruedo político de la principal figura concertacionista crea nuevas realidades en las relaciones y proyecciones de las dirigencias concertacionistas recientemente elegidas.

Finalmente, este primer período de gobierno se cierra con el inicio de la discusión sobre la ley de presupuesto, lo que ya ha puesto en tensión las relaciones Concertación-gobierno, organizando los partidos opositores su propia comisión.

En suma, si la proyección de crecimiento anual del Banco Central para 2010 se sitúa en torno al 5%, la principal figura concertacionista se aleja del país y las

96 "El apoyo a la manifestación se empina al 53% y un 86% piensa que huelga mapuche afecta imagen internacional de Chile". <http://diario.latercera.com/2010/09/13/01/contenido/pais/31-38458-9-encuesta-revela-que-86-piensa-que-huelga-mapuche-afecta-imagen-internacional-de.shtml>

tensiones al interior de la Concertación continúan o se profundizan, el próximo período -octubre 2010-marzo 2011- estaría creando inmejorables condiciones para que la agenda gubernamental gane espacios al interior de la oposición y el diseño político del ejecutivo adquiriera renovadas fuerzas. Todo esto, siempre y cuando la figura presidencial continúe logrando altos niveles de aprobación ciudadana.